

**Asamblea General**

Septuagésimo segundo período de sesiones

Documentos Oficiales

Distr. general
5 de diciembre de 2017
Español
Original: inglés

Sexta Comisión**Acta resumida de la 26ª sesión**

Celebrada en la Sede, Nueva York, el miércoles 1 de noviembre de 2017 a las 10.00 horas

Presidencia: Sr. Muhumuza (Uganda)
más tarde: Sr. Gafoor (Presidente) (Singapur)

Sumario

Tema 81 del programa: Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 69º período de sesiones (*continuación*)

La presente acta está sujeta a correcciones. Dichas correcciones deberán enviarse lo antes posible, con la firma de un miembro de la delegación interesada, al Jefe de la Sección de Gestión de Documentos (dms@un.org), e incorporarse en un ejemplar del acta.

Las actas corregidas volverán a publicarse electrónicamente en el Sistema de Archivo de Documentos de las Naciones Unidas (<http://documents.un.org/>).



Se declara abierta la sesión a las 10.05 horas.

Tema 81 del programa: Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 69º período de sesiones (continuación) (A/72/10)

1. **El Presidente** invita a la Comisión a proseguir el examen de los capítulos VIII a X del informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 69º período de sesiones (A/72/10).

2. **La Sra. McDougall** (Australia), refiriéndose al tema de las normas imperativas de derecho internacional general (*ius cogens*), dice que es apropiada la elaboración de un proyecto de conclusiones sobre el tema, a fin de reflejar el carácter dinámico de la formación, la aceptación y el reconocimiento de las normas de *ius cogens* por los Estados. Australia apoya el requisito de que deba aportarse prueba de que una norma es aceptada y reconocida como *ius cogens*; sin embargo, también está de acuerdo en que podría haber deficiencias metodológicas con ese enfoque, en particular cuando solo haya una práctica internacional limitada para determinar el grado de aceptación y reconocimiento por parte de los Estados. Dada la relativa incertidumbre en cuanto a si una determinada norma ha adquirido el rango de *ius cogens*, la oradora pregunta si la inclusión de una lista ilustrativa de esas normas tendrá algún beneficio y si se podrá llegar a un consenso respecto de dicha lista. Además, ello bien podría conspirar contra los objetivos que se quieren lograr, a saber, impartir claridad y plasmar un acuerdo sobre los criterios que han de aplicarse para identificar las normas imperativas. Australia recomienda, pues, que se adopte un enfoque prudente si se decide elaborar una lista de normas de *ius cogens*.

3. **El Sr. Simonoff** (Estados Unidos de América) dice que, si bien una mejor comprensión de la naturaleza del *ius cogens* podría contribuir a la comprensión de determinadas esferas del derecho internacional, en particular el derecho de los derechos humanos, su delegación sigue abrigando algunas preocupaciones respecto del tema titulado “Normas imperativas de derecho internacional general (*ius cogens*)”. Desde un punto de vista metodológico, su delegación cuestiona que se haya acumulado una práctica internacional suficiente sobre cuestiones importantes, por ejemplo, la forma en que una norma ha alcanzado el rango de *ius cogens* y el efecto jurídico de ese rango en relación con otras normas del derecho internacional y nacional.

4. Los criterios para la identificación de las normas imperativas deben basarse en el artículo 53 de la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados y ser compatibles con él. Su delegación acoge con beneplácito que el proyecto de conclusiones

aprobado provisionalmente por el Comité de Redacción, en los períodos de sesiones 68º y 69º (que se puede consultar en el sitio web de la Comisión), refleje correctamente la definición completa de la norma imperativa enunciada en el artículo 53. Está de acuerdo con la declaración contenida en el proyecto de conclusión 5 (Bases de las normas imperativas de derecho internacional general (*ius cogens*)) de que el derecho internacional consuetudinario es la base más común para la formación de las normas imperativas de derecho internacional general, pero no tiene conocimiento de ejemplos de normas imperativas que se sustenten en los principios generales del derecho, contrariamente a lo que se afirma en el párrafo 2 del proyecto de conclusión. La Comisión debería o bien suprimir la referencia a los principios generales del derecho o bien explicar en el comentario que no se ha demostrado que esos principios puedan ser realmente en algún momento la base de normas imperativas de derecho internacional.

5. Con respecto al proyecto de conclusión 9 (Prueba de la aceptación y el reconocimiento), propuesto por el Relator Especial en su segundo informe (A/CN.4/706), a juicio de su delegación, los fallos y decisiones de las cortes y tribunales internacionales no pueden servir de prueba de la aceptación y el reconocimiento por los Estados de las normas como normas imperativas. Tanto el proyecto de conclusión 13 del texto de la Comisión sobre la identificación del derecho internacional consuetudinario (A/71/10, párr. 62) como el Artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia reconocen atinadamente los fallos y decisiones de las cortes y tribunales internacionales solo como medios auxiliares para determinar las normas de derecho. Ese es el enfoque que debe adoptarse también con respecto a la identificación de las normas imperativas.

6. Si bien la labor de la Comisión sobre la sucesión de Estados en relación con la responsabilidad del Estado puede dar lugar a una mayor claridad en esta esfera del derecho, su delegación no está convencida de que el tema se ha de beneficiar de una amplia aceptación o ha de ser de interés para los Estados, en vista del reducido número de Estados que han ratificado la Convención de Viena de 1978 sobre la Sucesión de Estados en Materia de Tratados y la Convención de Viena de 1983 sobre la Sucesión de Estados en Materia de Bienes, Archivos y Deudas de Estado. Las cuestiones que el tema plantea son complejas y exigirán un cuidadoso examen por los Gobiernos a medida que la Comisión prosiga su labor sobre el texto; en esta etapa temprana, la Comisión debe indicar claramente cuándo considera que está codificando el derecho en vigor, por oposición al desarrollo progresivo del derecho.

7. Con respecto al proyecto de artículo 3 (Pertinencia de los acuerdos para la sucesión de Estados en materia de responsabilidad), propuesto en su primer informe sobre el tema (A/CN.4/708), el Relator Especial describe la pertinencia de los acuerdos, según el tipo de acuerdo de que se trate. Su delegación no tiene claro que la distinción entre los acuerdos de transmisión, los acuerdos de reclamaciones y otros acuerdos esté bien establecida en la práctica de los Estados. Debe prestarse más atención a la cuestión relativa a saber si la distinción constituye un sano fundamento para las conclusiones generales sobre la práctica de los Estados. Por otra parte, en el proyecto de artículo 3, párrafo 4, se reconoce atinadamente la importancia fundamental de los principios reflejados en los artículos 34 a 36 de la Convención de Viena de 1969, incluida la regla general de que un tratado no crea ni obligaciones ni derechos para un tercer Estado sin su consentimiento.

8. Con respecto al tema titulado “Protección del medio ambiente en relación con los conflictos armados”, el orador dice que los Estados Unidos continúan preocupados por la atención que se presta a la aplicación concurrente de ramas del derecho distintas del derecho internacional humanitario durante los conflictos armados. El derecho internacional humanitario es la *lex specialis* en situaciones de conflicto armado, y la medida en que pueden aplicarse las normas contenidas en otras ramas del derecho debe examinarse caso por caso. Asimismo, preocupa a los Estados Unidos que la Comisión tal vez no sea el foro apropiado para examinar si determinadas disposiciones del derecho internacional humanitario reflejan el derecho internacional consuetudinario; además, un quehacer de esa índole requerirá un amplio y riguroso examen de la práctica de los Estados, acompañada de la *opinio juris*.

9. Varios de los proyectos de principios se enuncian en términos obligatorios, que pretenden imponer qué “deberán” o “deben” hacer los Estados. Esa redacción únicamente es apropiada con respecto a normas bien establecidas que constituyan *lex lata*. De acuerdo con los proyectos de disposiciones introductorias y los proyectos de principio aprobados provisionalmente hasta el momento por el Comité de Redacción (A/CN.4/L.870), los proyectos de principio tienen por objeto “mejorar” la protección del medio ambiente en relación con los conflictos armados --en otras palabras, se encaminan a influir en el desarrollo progresivo del derecho--, y no cabe duda de que varios de los proyectos de principio van mucho más allá de las normas jurídicas vigentes. Por ejemplo, el proyecto de principio 8, aprobado provisionalmente en el 68º período de sesiones y contenido en el documento A/CN.4/L.876, introduce nuevas obligaciones jurídicas sustantivas en relación con las operaciones de mantenimiento de la

paz, y el proyecto de principio 16 amplía las obligaciones de limpiar, remover o destruir los restos explosivos de guerra, como se establece en la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que Puedan Considerarse Excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados (Convención sobre Ciertas Armas Convencionales), mediante la inclusión de restos explosivos de guerra “tóxicos y peligrosos”.

10. El Sr. Fernández Valoni (Argentina), refiriéndose al segundo informe sobre las normas imperativas de derecho internacional general (*ius cogens*) (A/CN.4/706), dice que el primer criterio relativo al *ius cogens* identificado por el Relator Especial es que debe ser una norma de derecho internacional general, y la manifestación más obvia del derecho internacional general es el derecho internacional consuetudinario, como lo confirman las decisiones de las cortes y tribunales nacionales e internacionales. A su delegación le complace, pues, que se haya hecho mención de la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Argentina en este sentido, y considera que también se debería tener en cuenta la labor relativa al tema de la identificación del derecho internacional consuetudinario.

11. En cuanto al segundo criterio, el reconocimiento y la aceptación de una norma de *ius cogens* en calidad de norma inderogable, su delegación concuerda con el Relator Especial en que el reconocimiento y la aceptación por los Estados son pertinentes, si bien estima que la práctica de los agentes no estatales bien puede contribuir a la evaluación del reconocimiento y la aceptación por los Estados.

12. El informe arroja luz sobre la forma en que deben demostrarse la aceptación y el reconocimiento por los Estados y enumera las fuentes pertinentes, a saber, tratados, resoluciones de la Asamblea General, declaraciones públicas hechas en nombre de los Estados y decisiones de las cortes y tribunales internacionales. A juicio de su delegación, el estado de ratificación de tratados específicos y las disposiciones respecto de las cuales los Estados han hecho reservas también se pueden interpretar como manifestación del consentimiento de los Estados. Otro elemento, incluido en el proyecto de conclusión 3 en calidad de elemento descriptivo, aunque no constitutivo, es el hecho de que las normas de *ius cogens* protegen los valores fundamentales de la comunidad internacional. Aunque ese no es uno de los elementos constitutivos en el artículo 53 de la Convención de Viena, a no dudarlo se deberían tener en cuenta otros elementos que elevan a una norma al rango de *ius cogens*, como los valores que esta protege.

13. Esos elementos descriptivos se mencionan en diversas decisiones de cortes y tribunales internacionales, como, por ejemplo, la decisión en la causa *Fiscalía c. Furundžija*, en la que el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia indicó que la prohibición de la tortura había pasado a ser una norma de *ius cogens* habida cuenta de “la importancia de los valores que protege”. En su opinión consultiva sobre las *Reservas a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio*, la Corte Internacional de Justicia afirmó que los principios en que se sustenta la Convención son principios reconocidos por las naciones civilizadas con el rango de normas vinculantes para los Estados, incluso en ausencia de toda obligación dimanada de una convención. En su opinión consultiva sobre la *Legalidad de la amenaza o el empleo de armas nucleares*, la Corte aludió a los valores protegidos por las normas de *ius cogens* al mencionar las normas del derecho humanitario que son fundamentales para el respeto de la persona humana y las consideraciones elementales de humanidad. Los órganos regionales también han hecho referencia expresa a ese elemento normativo: por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la causa *Michael Domingues c. Estados Unidos*, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la causa *Al-Adsani c. Reino Unido*.

14. La identificación de las normas de *ius cogens* bien puede incidir de manera considerable en la práctica de los Estados con respecto a los motivos de denegación de las solicitudes de extradición, las rogatorias de asistencia judicial mutua en el marco del ejercicio de la jurisdicción universal y las obligaciones de extraditar o juzgar en los casos de crímenes internacionales. De ahí la necesidad de un enfoque prudente respecto del tema, que dé prioridad a un análisis que vele por la certidumbre jurídica en las relaciones entre los Estados.

15. En relación con el proyecto de la Comisión sobre los crímenes de lesa humanidad, el orador dice que, sin perjuicio de las observaciones sobre el proyecto de artículos que su Gobierno tal vez desee formular antes de la fecha límite del 1 de diciembre de 2018, la labor sobre el proyecto puede avanzar sin riesgo de contradecir los acuerdos ya logrados por la comunidad internacional, puesto que los proyectos de artículos 1 a 15 se basan en precedentes que figuran en los instrumentos internacionales sobre crímenes internacionales, en particular el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Entre los aspectos positivos del proyecto de artículos cabe mencionar la inclusión del principio *aut dedere aut iudicare* y el hecho de que, a los efectos de las solicitudes de extradición, un crimen de lesa humanidad no puede ser asimilado a un delito político. Por otra parte, cabe señalar que no se han

incluido disposiciones que prohíban la concesión de amnistía o el indulto por esos crímenes.

16. Si bien los Estados partes en el Estatuto de Roma están obligados a incorporar los delitos en virtud del Estatuto en su legislación nacional, las obligaciones de prevención, la cooperación en la investigación y el enjuiciamiento de esos delitos corresponden a todos los Estados. En ese sentido, la Argentina, junto con Bélgica, Eslovenia, los Países Bajos y el Senegal, ha presentado una iniciativa para la aprobación de un instrumento multilateral, en el que se invita a todos los Estados a adherirse, en materia de asistencia judicial mutua y extradición por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio. La iniciativa no se contradice con el proyecto que se examina sobre los crímenes de lesa humanidad.

17. Por último, en relación con la aplicación provisional de los tratados, su delegación acoge con beneplácito que el proyecto de directrices sobre el tema tenga en cuenta la práctica contemporánea y que deje en claro que el artículo 25 de la Convención de Viena no es un régimen autónomo: por el contrario, un tratado aplicado provisionalmente produce efectos jurídicos al igual que un tratado que ha entrado en vigor y, en consecuencia, las demás disposiciones de la Convención de Viena son aplicables *mutatis mutandis*.

18. **El Sr. Nagy** (Eslovaquia) dice que su Gobierno acoge con beneplácito el enfoque del Relator Especial de que el artículo 53 de la Convención de Viena de 1969 sea un punto de partida para elaborar los criterios relativos a la identificación de las normas imperativas de derecho internacional general. Sin embargo, hay varias cuestiones que son motivo de preocupación.

19. Por ejemplo, en relación con el requisito de la aceptación y el reconocimiento, es de vital importancia indicar de qué manera la comunidad de los Estados habrá de plasmar la llamada *opinio iuris cogentis*. En verdad, a juicio de su delegación, los proyectos de conclusión 6 a 9 propuestos por el Relator Especial generan incertidumbre sobre la forma en que se ha de determinar la *opinio juris*, lo que no es deseable. El Relator Especial, por lo tanto, debería elucidar con más precisión la cuestión relativa a saber si la aceptación y el reconocimiento están necesaria y exclusivamente relacionados con la inderogabilidad y, en caso afirmativo, si los Estados deben expresar su aceptación y reconocimiento explícitamente o si pueden hacerlo mediante una remisión a los valores más fundamentales o las normas más importantes y universales, por ejemplo. Además, dado que el proyecto de conclusiones emplea los términos “aceptación” y “reconocimiento” casi siempre de manera inseparable, no se echa de ver con claridad si el primero se refiere a una mera actitud

pasiva y el segundo a alguna declaración o comportamiento concretos, o si se trata de dos etapas diferentes y necesarias de la *opinio juris*. Lamentablemente, el proyecto de conclusión 9, relativo a la prueba de la aceptación y el reconocimiento, no arroja mucha luz sobre esas cuestiones. Afirmar que la prueba de la aceptación y el reconocimiento “puede reflejarse en una variedad de materiales y puede adoptar diversas formas”, y luego dar ejemplos de tratados, resoluciones, declaraciones públicas, etc., no pone de manifiesto si la aceptación y el reconocimiento pueden también adoptar una forma implícita, tácita o pasiva.

20. El proyecto de conclusión 7, al decir que la frase “comunidad internacional de Estados en su conjunto” se refiere a “una gran mayoría de Estados”, deja pendiente la cuestión de si se requiere una determinada uniformidad entre esa gran mayoría a fin de concordar con la formulación “en su conjunto”.

21. Por último, Eslovaquia apoya la inclusión de una lista ilustrativa de normas que se consideren imperativas: sin esa lista, mal puede estimarse posible el examen de todos los aspectos esenciales de las normas imperativas de derecho internacional general.

22. **El Sr. Racovita** (Rumania) dice que su país apoya en gran medida los proyectos de conclusión 4 a 9 sobre las normas imperativas de derecho internacional general (*ius cogens*), que considera un reflejo bien equilibrado y preciso del derecho internacional en vigor en esa esfera. En relación con el proyecto de conclusión 4, Rumania está de acuerdo con el enfoque de dos criterios que se ha aplicado y coincide con el Relator Especial en que la modificación por una norma ulterior de *ius cogens*, aunque figura en el texto del artículo 53 de la Convención de Viena de 1969, no es un criterio independiente para la identificación de una norma de *ius cogens*.

23. En el proyecto de conclusión 5 se enuncia el criterio que se ha de aplicar para identificar la existencia de una norma de *ius cogens* (párrafo 1) y luego se procede a designar las fuentes de esas normas (párrafos 2 a 4). Rumania sostiene que, conceptualmente, los criterios para identificar las normas de *ius cogens* y las fuentes de esas normas son cuestiones diferentes, por lo que será más útil y tendrá mejor fundamento enunciarlos en disposiciones separadas; además, en el título del proyecto de conclusión debería haber una mención específica de las fuentes. A fin de racionalizar el texto, el proyecto de conclusión 6 podría suprimirse, ya que la teoría enunciada en el párrafo 1 se deriva de la definición que figura en el proyecto de conclusión 4, en tanto el contenido del párrafo 2 está esencialmente comprendido por el proyecto de conclusión 7.

24. En cuanto al proyecto de conclusión 7, el orador dice que su delegación abriga algunas reservas acerca de la afirmación que figura en el párrafo 3 de que “La aceptación y el reconocimiento por una gran mayoría de Estados son suficientes para la identificación de una norma como norma de *ius cogens*”. Por su propia naturaleza, las normas de *ius cogens* constituyen obligaciones imperativas vinculantes para todos los Estados y reflejan las normas fundamentales compartidas por la comunidad de Estados; esas normas son aceptadas por la unanimidad o cuasi unanimidad de los Estados. Lo mismo se puede decir respecto de la frase según la cual la norma en cuestión “debe ser aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto” en el proyecto de conclusión 7. Rumania sugiere que se emplee una formulación más estricta y, en lugar de la “gran mayoría”, se hable de “una gran mayoría muy amplia”.

25. En el proyecto de conclusión 8 se hacen algunas distinciones y aclaraciones útiles que ayudan a diferenciar la aceptación y el reconocimiento como criterio para las normas de *ius cogens* y otros conceptos. Por último, el proyecto de conclusión 9 es útil pues presenta ejemplos de los tipos de materiales que podrían servir para confirmar la aceptación y el reconocimiento de una norma del derecho internacional como norma de *ius cogens*. Rumania apoyará la retención de los proyectos de conclusión 8 y 9 en su forma actual.

26. En cuanto a la sucesión de Estados en relación con la responsabilidad del Estado, el orador dice que el debate en el seno de la Comisión ha dado lugar a una conclusión importante, a saber, que no hay un único marco normativo pertinente para el tema y que la práctica de los Estados es limitada, en particular en lo que respecta a su coherencia. Rumania puede estar de acuerdo con el Relator Especial en cuanto al carácter inmutable de la teoría de la no sucesión. Sin embargo, es necesario evaluar adecuadamente diversas situaciones relacionadas con la sucesión de Estados, a fin de evitar la afirmación contraria: que la teoría de la sucesión es la regla general. Lo más probable es que haya una tendencia a alejarse de la teoría de la no sucesión en situaciones concretas y bien definidas.

27. Rumania no se siente inclinada a favor de la formulación de nuevas normas en ese ámbito. Varias observaciones formuladas en el curso del debate en la Comisión fundamentan la posición de que se podría elaborar un conjunto de proyectos de directrices o, a lo sumo, un conjunto de reglas. La necesidad de flexibilidad y el carácter auxiliar de las normas pertinentes requieren un instrumento menos formal que una convención. Los trabajos sobre la sucesión de Estados en relación con la responsabilidad del Estado

bien pueden ser un modelo útil para ser utilizado y modificado por los Estados interesados. No obstante, Rumania no está todavía persuadida de que la Comisión deba continuar la labor sobre el tema, pues tiene una exigua pertinencia en la práctica.

28. Su delegación considera útil la observación formulada por el Grupo de Trabajo sobre la protección del medio ambiente en relación con los conflictos armados de que se pueden seguir examinando otras cuestiones, incluidas las cuestiones de la complementariedad con otras ramas pertinentes del derecho internacional, tales como el derecho internacional del medio ambiente o la protección del medio ambiente en situaciones de ocupación. También es pertinente, a fin de impartir amplitud al análisis, la complementariedad con el derecho del mar y la relación con las amenazas de la piratería y la guerra marítima no convencional. Si bien reconoce la dificultad de hacer un inventario de las normas aplicables a los conflictos híbridos y a los agentes no estatales, Rumania cree firmemente que son pertinentes en relación con el tema.

29. En cuanto a la cuestión de los grupos particularmente vulnerables, el orador dice que los daños al medio ambiente durante un conflicto armado pueden tener consecuencias directas, en cualquier territorio, para todas las personas –quienes dependan de la agricultura, por ejemplo–, incluso cuando no se trate de poblaciones indígenas. Así pues, la Comisión tal vez quiera examinar una declaración general encaminada a la protección de las personas que tienen una relación muy estrecha con el medio ambiente que abarque a las poblaciones locales empobrecidas.

30. **La Sra. Egmond** (Países Bajos), refiriéndose al tema de las normas imperativas de derecho internacional general (*ius cogens*), dice que, como lo han demostrado los debates en la Comisión, todavía se cuestionan muchos elementos del *ius cogens*. Los Países Bajos comparten la preocupación expresada por Francia en el pasado con respecto a la falta de claridad sobre el concepto de *ius cogens* y, en particular, su aplicación, y espera que la Comisión evalúe constantemente los avances realizados en relación con el tema.

31. Su Gobierno apoya la idea de que el derecho internacional consuetudinario es la fuente más importante de las normas de *ius cogens* y comparte las dudas expresadas por la Comisión en su 69º período de sesiones sobre el *ius cogens* que se podría derivar de los principios generales y las disposiciones de los tratados. La mayoría de los principios generales no tienen el carácter inderogable de las normas de *ius cogens*, y muchas de las disposiciones de los tratados carecen de aplicación universal; en los casos en que sí son de aplicación universal, por lo común ello se debe a su

carácter consuetudinario, además de estar incluidas en un tratado. La adhesión universal a un tratado es la excepción y no la regla. Su Gobierno apoya la prueba del doble criterio: para que una norma se eleve al rango de *ius cogens*, se necesitan tanto el reconocimiento de la norma como tal (la práctica y la *opinio juris*) y el reconocimiento de su carácter imperativo (la práctica y la *opinio iuris cogens*).

32. Mediante la inclusión de ambos criterios, el Comité de Redacción ha resuelto la cuestión relativa a saber si las normas de *ius cogens* protegen los valores fundamentales o los reflejan. Sin embargo, su Gobierno no está convencido de que la cuestión sea realmente pertinente; lo que importa es que la norma debe ser aceptada y reconocida por la comunidad internacional con el carácter de *ius cogens* y que es inderogable.

33. En opinión de los Países Bajos, la inclusión de una lista de normas con rango de *ius cogens* no es deseable. La naturaleza autoritativa de una lista de esa índole elaborada por la Comisión, sea a título ilustrativo u otro título, muy probablemente podría impedir la formación de la práctica de los Estados y la *opinio juris* en apoyo de otras normas. Si la inclusión de una lista, sin embargo, se considerara necesaria, su Gobierno sugiere que se añada asimismo una remisión a los comentarios de los artículos 26 y 40 de los artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, que incluyen listas no exhaustivas de normas imperativas.

34. El ámbito de aplicación de las normas de *ius cogens* no debe limitarse al derecho de los tratados, pues también se han de tener en cuenta tanto el efecto del carácter de *ius cogens* de una norma en el contexto de la jurisdicción y las inmunidades, por ejemplo, como las normas pertinentes que figuran en los artículos sobre la responsabilidad del Estado.

35. En cuanto a los próximos pasos, el segundo informe sobre el tema (A/CN.4/706) demuestra que la práctica relativa a la definición del *ius cogens* varía entre las diversas cortes y tribunales. Sin embargo, ello deja pendiente la cuestión de qué ocurre cuando una determinada norma es jerárquicamente superior a otra. Además, la inderogabilidad no es simplemente una consecuencia del rango de *ius cogens*: es también una característica, porque una norma derogable no puede ser una norma de *ius cogens*. La cuestión fundamental no debe ser la posibilidad de dejar de lado una norma de *ius cogens* mediante acuerdo, sino la de la forma en que el rango de *ius cogens* de una norma incide en una evaluación de la responsabilidad de un Estado por un comportamiento y la existencia de normas que lo justifiquen. Su Gobierno ha observado la exigüidad de la práctica de los Estados sobre esa cuestión y, en

consecuencia, alienta a la Comisión a realizar un análisis de la forma en que, en la práctica, los Estados y sus tribunales encaran la jerarquía que se asigna a las normas de *ius cogens* en relación con otras normas aplicables.

36. En cuanto al tema de la sucesión de Estados en relación con la responsabilidad del Estado, la oradora dice que los Países Bajos no están convencidos de que el resultado deba adoptar la forma de un proyecto de artículos con comentarios: más apropiado sería elaborar un conjunto de principios o directrices, que se base en el principio fundamental en que se sustentan la sucesión y la responsabilidad de los Estados, a saber, que no debería haber vacío alguno en la responsabilidad del Estado en los casos de disolución o unificación, en los que el Estado originario haya desaparecido, o en los casos de secesión, en los que el Estado predecesor continúa existiendo. Que los derechos u obligaciones se transfieran o no en situaciones concretas es cosa que se ha de evaluar caso por caso y abordar en un acuerdo sobre la sucesión. Su Gobierno, por ende, acoge con beneplácito la sugerencia del Relator Especial de que se debe dar prioridad a la concertación de acuerdos entre los Estados. La práctica de los Estados y también la jurisprudencia sugieren que los Estados sucesores en general aprecian la necesidad de evitar la creación de un vacío en lo que se refiere a la responsabilidad de los Estados, mediante la concertación de acuerdos entre ellos. Dada la delicada naturaleza de la sucesión de Estados y la necesidad de dar flexibilidad a los Estados para negociar las condiciones de la sucesión, los principios o directrices deberían tener un carácter subsidiario y servir de modelo para la concertación de acuerdos.

37. En cuanto al tema de la protección del medio ambiente en relación con los conflictos armados, aunque toma nota de la declaración formulada por el Grupo de Trabajo de que es importante completar la labor sobre el tema, su Gobierno desea reiterar su opinión, expresada en 2014 tras el examen del informe preliminar de la Relatora Especial, de que el objetivo general del estudio es solo el de aclarar las normas y los principios existentes del derecho internacional del medio ambiente en relación con los conflictos armados. La Comisión debería abstenerse de redefinir las normas reconocidas del derecho internacional humanitario. Tomando nota de la referencia hecha por el Grupo de Trabajo a la cuestión de la complementariedad, la oradora dice que, si bien sería útil examinar la cuestión, los Países Bajos estiman que no se debe seguir ampliando el tema.

38. **La Sra. Ben-David Gerstman** (Israel) dice que, si bien la noción de *ius cogens* ha existido durante siglos, el proceso de consecución de ese rango aún no

está claro. En vista de esa incertidumbre, la Comisión debería seguir refinando su labor, sin una ampliación inmediata de su ámbito, continuando el desarrollo del proyecto de conclusiones con su correlativo comentario. En lo que respecta a la compilación de una lista de normas de *ius cogens*, ya sea exhaustiva o ilustrativa, Israel considera que será prematuro hacerlo antes de completar la labor sobre los criterios y las consecuencias del *ius cogens*, ya que podría generar confusión en lugar de claridad y consenso.

39. Debido a la interrelación fundamental entre las normas consuetudinarias y el *ius cogens*, Israel recomienda que se entable un diálogo continuo sobre la labor relativa al *ius cogens* y a la identificación del derecho internacional consuetudinario, a fin de velar por la coherencia y la armonía, tanto en el enfoque conceptual como en las categorías y la terminología utilizadas para cada uno de los temas. Actualmente hay considerables discrepancias entre los principios y la terminología utilizados en los proyectos de conclusión sobre el *ius cogens* y los empleados para abordar esferas similares en el contexto de la labor sobre la identificación del derecho internacional consuetudinario.

40. Refiriéndose a los proyectos de conclusión propuestos por el Relator Especial, la oradora dice que es necesario aclarar la distinción entre los criterios relativos al *ius cogens*, consignados en el proyecto de conclusión 4, por un lado, y los elementos descriptivos enunciados en el proyecto de conclusión 3, por el otro; la formulación actual de ambos proyectos de conclusión deja un margen para el debate sobre la importancia del proyecto de conclusión 3. Es cuestionable que sea apropiado incorporar, a las conclusiones de carácter jurídico, elementos descriptivos que no sean de naturaleza normativa y cuyas ramificaciones jurídicas no sean claras. Por otra parte, Israel apoya la clara distinción en el proyecto de conclusión 5 entre las fuentes de derecho que pueden servir de fundamento para las normas de *ius cogens*, como el derecho internacional consuetudinario, y las fuentes que solo pueden reflejar esas normas, como el derecho de los tratados.

41. En cuanto al nivel de aceptación y reconocimiento necesario para la identificación de una norma como *ius cogens*, como se indica en el proyecto de conclusión 7, su delegación está de acuerdo con que la redacción actual no es ni equilibrada ni refleja tampoco la metodología actual para esa identificación; además, la aceptación debiera ser la de “virtualmente todos” los Estados, y no la de una “gran mayoría” de los Estados.

42. La oradora precisa que su observación anterior sobre la necesidad de coherencia con el proyecto sobre la identificación del derecho internacional consuetudinario es de particular importancia cuando se trata de examinar el proyecto de conclusión 9. El criterio de prueba requerido para identificar el *ius cogens* es considerablemente superior a la norma necesaria para identificar el derecho consuetudinario, que en sí mismo es riguroso. Cuando se utilizan los tratados como prueba de la existencia de normas imperativas, únicamente los tratados con un nivel de adhesión virtualmente universal pueden servir de prueba de la aceptación. No es apropiado examinar las resoluciones políticas de las organizaciones internacionales o los fallos de los tribunales nacionales como prueba, e Israel recomienda que se suprima ese elemento en el proyecto de conclusiones.

43. Habida cuenta de la realidad contemporánea de los Estados, Israel pone en tela de juicio la necesidad de un estudio del tema de la sucesión de Estados en relación con la responsabilidad del Estado. Aunque el proyecto se encuentra en su infancia, y es demasiado pronto para determinar su forma definitiva, el producto final será de carácter subsidiario respecto a los acuerdos entre los Estados en el contexto de una sucesión determinada.

44. En cuanto al proyecto de artículos, su delegación comparte la preocupación de algunos miembros de la Comisión de que los proyectos de artículos 3, párrafo 4, y 4, párrafo 3, puedan ser redundantes, pues se limitan a reiterar que los acuerdos existentes están sujetos a los principios aceptados del derecho internacional. Israel está de acuerdo con quienes propugnan remitir únicamente los proyectos de artículos 1 y 2 al Comité de Redacción en este momento, y mantener los proyectos de artículos 3 y 4 para su ulterior examen.

45. **La Sra. Mousavinejad** (República Islámica del Irán) dice que, si bien el segundo informe sobre el *ius cogens* (A/CN.4/706) indica que los criterios acumulativos para la identificación de las normas de *ius cogens* se derivan del artículo 53 de la Convención de Viena de 1969, no se pronuncia sobre la cuestión de quién determina si se han cumplido esos criterios. Para colmar esa laguna, una solución puede tomarse del artículo 66 a) de la Convención de Viena de 1969, en que la Corte Internacional de Justicia es reconocida como el principal órgano competente para resolver las controversias sobre la aplicación o interpretación del *ius cogens*. En el párrafo 125 de su fallo de febrero de 2006 en la causa relativa a las *Actividades armadas en el territorio del Congo (República Democrática del Congo c. Rwanda)*, la Corte afirmó que las normas enunciadas en el artículo 66 de la Convención de Viena no tienen el carácter de derecho internacional consuetudinario.

Además, varios países formularon reservas a dicho artículo cuando pasaron a ser partes en la Convención.

46. Según el párrafo 31 del informe, los criterios para la identificación de las normas de *ius cogens* se refieren a los elementos que deben estar presentes antes de que se pueda considerar que una norma tiene carácter de *ius cogens*. Por lo tanto, la inderogabilidad no se puede considerar como un criterio, ya que es consecuencia del surgimiento de una norma de *ius cogens*. Como lo reafirmó el Comité de Derechos Humanos en su observación general núm. 29, la enumeración de las disposiciones inderogables está vinculada, aunque no es idéntica, a la cuestión de si ciertas obligaciones en materia de derechos humanos tienen el carácter de norma imperativa de derecho internacional general. Además, la categoría de normas imperativas va más allá de las disposiciones inderogables que figuran en el artículo 4, párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

47. Su delegación apoya el nuevo título del tema, que se deriva de la Convención de Viena de 1969. Sigue creyendo que la idea de elaborar una lista de normas de *ius cogens* requiere un examen más detenido. Si algún día se elabora esa lista, en el primer lugar de dicha lista ha de consignarse la mención, que se hace en el artículo 52 de la Convención de Viena de 1969, de la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza como fundamento para la anulación de un tratado. El artículo 52 se debe interpretar junto con el artículo 53 para declarar la nulidad *ab initio* de un tratado concertado en contradicción con el *ius cogens*.

48. Su delegación abriga la convicción de que, en caso de conflicto entre normas de *ius cogens* y obligaciones contraídas en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, las normas de *ius cogens* siguen siendo de superior jerarquía. Las obligaciones que dimanen de la Carta solo tendrán primacía cuando haya un conflicto entre esas obligaciones y las obligaciones establecidas en cualquier otro convenio internacional, como dispone el Artículo 103 de la Carta.

49. Se ha hecho referencia a la definición por algunos tribunales de ciertas normas que constituyen *ius cogens* regional, a fin de preservar el orden público en una región geográfica determinada. No obstante, de conformidad con el artículo 53 de la Convención de Viena de 1969, la razón principal para el reconocimiento de una norma imperativa de derecho internacional general es que se trata de una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto. Es evidente que el concepto de *ius cogens* regional no puede inferirse de ese criterio.

50. Con respecto a los proyectos de conclusión propuestos por el Relator Especial, la oradora dice que respecto del proyecto de conclusión 7, párrafo 2, sobre el requisito de la aceptación y el reconocimiento por una gran mayoría de los Estados, su delegación apoya la idea de que se aluda a “una gran mayoría muy amplia” de Estados, que represente las principales formas de civilización y los principales sistemas jurídicos del mundo. También está de acuerdo su delegación con la combinación de los proyectos de conclusión 6 y 8, ya que el proyecto de conclusión 8 es una reformulación del proyecto de conclusión 6.

51. En cuanto al proyecto de conclusión 4, la oradora señala que la palabra “*démontrer*” en el texto francés no es un buen equivalente del término “establish” en el texto inglés, ya que no denota el mismo umbral; por lo tanto, propone que se use el término “*établir*” para resolver la discrepancia entre ambas versiones.

52. En cuanto al tema titulado “La sucesión de Estados en relación con la responsabilidad del Estado”, la oradora dice que, habida cuenta de la exigüidad de la práctica de los Estados y del limitado número de casos pertinentes, dista de ser persuasiva la conclusión de que ha cambiado la norma de la no sucesión en relación con la responsabilidad del Estado. Si el Relator Especial estima lo contrario, debe aportar más materiales y razonamiento.

53. Su delegación está de acuerdo con el argumento del Relator Especial de que, en principio, un acuerdo entre Estados debería tener prioridad respecto de las normas generales subsidiarias sobre sucesión. A los efectos del tema, únicamente se deben tener en cuenta los acuerdos concertados entre Estados de conformidad con las normas aplicables del derecho internacional en materia de tratados y después de la fecha de la sucesión. Las normas que rigen la sucesión de Estados no deben afectar los derechos y obligaciones de los movimientos de liberación en los Estados bajo ocupación extranjera, cuya situación después de la independencia es comparable a los países surgidos de *tabula rasa*. En el caso de una ocupación extranjera ilícita prolongada, la responsabilidad derivada del hecho ilícito de una Potencia ocupante debe recaer constantemente en ella y no en el Estado sucesor, incluso después de concluida la ocupación. Esto se debe inferir de un principio reconocido del derecho internacional, a saber, *ex injuria jus non oritur*.

54. Su delegación apoya la supresión del proyecto de artículo 2 e), relativo a la definición de la responsabilidad internacional, ya que ni los artículos sobre la responsabilidad del Estado ni los artículos sobre la responsabilidad de las organizaciones internacionales contienen una disposición de este tipo.

55. En cuanto al proyecto de artículo 4, párrafo 2, relativo a las declaraciones unilaterales, señala que no incluye todos los requisitos jurídicos de las declaraciones unilaterales: el Relator Especial debe hacer referencia a los principios rectores aprobados por la Comisión en 2006.

56. En cuanto a la forma final de la labor de la Comisión sobre el tema, su delegación no está convencida de que el proyecto de artículos sea una buena elección. En el pasado, los Estados han preferido resolver sus controversias sobre sucesión mediante acuerdos bilaterales. Por lo tanto, la oradora se inclina a estar de acuerdo con algunos miembros de la Comisión de que un proyecto de directrices será más apropiado.

57. En cuanto a los materiales preparados por organizaciones no gubernamentales como el Instituto de Derecho Internacional y la Asociación de Derecho Internacional en lo que respecta a la sucesión de Estados en relación con la responsabilidad del Estado, la oradora dice que la Comisión parece tener dos opciones: o bien atenerse a las normas que reflejan la *lex lata* en la labor ya realizada, lo que plantea la cuestión de la riqueza y la novedad del producto final, u optar por la labor realizada como punto de partida.

58. **El Sr. Thathong** (Tailandia), hablando sobre el tema de las normas imperativas de derecho internacional general (*ius cogens*), dice que, si bien cabe acoger con beneplácito el hecho de que el Relator Especial haya adoptado la definición de *ius cogens* del artículo 53 de la Convención de Viena como fundamento para su análisis, especialmente teniendo en cuenta que es la definición más utilizada de *ius cogens*, esa definición es solo “para los fines de la presente Convención” y es parte de un tratado. La interpretación de la definición, por lo tanto, debería conformarse a los pasos indicados en los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena.

59. En cuanto a la cuestión de si debería haber una lista ilustrativa de normas de *ius cogens*, Tailandia estima que el establecimiento de una lista de esa índole obstaculizará el desarrollo del *ius cogens*, que es de carácter dinámico y evolutivo. Acerca del significado de la frase “comunidad internacional de Estados en su conjunto”, el proyecto de conclusión 7, párrafo 3, sugiere que, con el fin de identificar el *ius cogens*, la aceptación y el reconocimiento por una gran mayoría de Estados es suficiente, y que el reconocimiento por todos los Estados no es necesario. Sin embargo, durante la negociación del artículo 53 de la Convención de Viena, hubo alguna incertidumbre en torno a la frase “en su conjunto”. Algunos Estados votaron en contra del artículo 53, precisamente porque la frase era poco clara. En opinión de su delegación, el proyecto de conclusión 7, párrafo 3, no refleja con precisión la intención de los

negociadores del artículo 53, y la expresión “en su conjunto” requiere un umbral mucho más elevado que el de simplemente “una gran mayoría”. El Relator Especial debe aportar pruebas más concretas basadas en la práctica de los Estados en apoyo de sus conclusiones. Es sumamente importante no apresurarse a sacar conclusiones en ámbitos en que la práctica de los Estados es poco clara o limitada. Al propio tiempo, la Comisión debería seguir identificando y evaluando los acontecimientos relativos al *ius cogens* que tuvieron lugar en el derecho internacional después de la aprobación de la Convención de Viena, a fin de determinar el entendimiento del *ius cogens* que mejor refleje la intención y las prácticas actuales de todos los Estados.

60. En cuanto al tema titulado “La protección del medio ambiente en relación con los conflictos armados”, el orador dice que los daños causados por los conflictos armados al medio ambiente pueden tener efectos devastadores a largo plazo, tanto sobre el bienestar ecológico de la Tierra como sobre los medios de vida de la población, y podrían revertir años de avances laboriosos en materia de desarrollo. Sin embargo, se ha prestado poca atención a la prevención y a la mitigación de esos daños. Por esa razón, Tailandia sigue con gran interés la forma en que se ha de desarrollar la interrelación entre el derecho internacional ambiental y el derecho internacional humanitario en ese sentido. La colaboración activa con las organizaciones internacionales que poseen tanto la experiencia como los conocimientos especializados pertinentes, como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y el Comité Internacional de la Cruz Roja, mejorará la comprensión de las consecuencias ambientales de los conflictos armados y las medidas preventivas y correctivas que podrían adoptarse. Tailandia alienta a la Comisión a que siga refinando el proyecto de principios y elaborando los proyectos de comentarios de manera expeditiva.

61. **El Sr. Varankov** (Belarús), hablando sobre el tema de las normas imperativas de derecho internacional general (*ius cogens*), dice que el examen de esas normas está pendiente desde hace mucho tiempo. El aumento de la certidumbre jurídica reduciría al mínimo el peligro de abusos en el contexto de una tendencia inquietante de diversos órganos judiciales, en su interpretación de los tratados internacionales, a afirmar que constituyen *ius cogens* unas normas contenidas en tratados que no han adquirido una amplia adhesión o que no se sustentan en la práctica de los Estados. Ese tipo de razonamiento, ya sea por parte de las instituciones judiciales o de los Estados, es tendencioso y carece de todo fundamento jurídico.

62. La labor sobre el tema del *ius cogens* debe ir de la mano de la identificación del derecho internacional consuetudinario. Con ese fin, es deseable que se elabore una definición de trabajo del derecho internacional general. Sobre la base de los criterios establecidos en el artículo 53 de la Convención de Viena, su delegación considera que el concepto de normas de *ius cogens* regional puede entrar en juego solo para los Estados que hayan convenido en la aplicación de esas normas; en consecuencia, esas normas no pueden ser de aplicación universal. No obstante, sería útil examinar ejemplos de normas de *ius cogens* regional y elaborar una metodología para identificar las normas imperativas en general.

63. En cuanto a los proyectos de conclusión propiamente dichos, el orador dice que la idea de incorporar al proyecto de conclusión 3 la fórmula que figura en los artículos sobre la responsabilidad del Estado es prometedora, ya que evitaría el enfoque “basado en valores fundamentales”. Aunque se podría contemplar la elaboración de una sola lista de valores fundamentales, esos valores van a diferir considerablemente, tanto en su contenido como en su importancia relativa. Si bien no cuestiona la afirmación de que las normas de *ius cogens* reflejan y protegen valores fundamentales, apoya firmemente la opinión del Relator Especial de que son elementos descriptivos y no constitutivos del *ius cogens*. El peligro radica, sin embargo, en que la introducción de esos elementos complique la identificación de las normas de *ius cogens* debido a las opiniones divergentes sobre qué son “valores fundamentales”. Para evitar esa ambigüedad indeseable, sin dejar al propio tiempo de incluir los elementos descriptivos, es preciso distinguir de manera muy clara y tangible los elementos constitutivos de los descriptivos.

64. En cuanto al proyecto de conclusión 7, el orador recuerda que algunas delegaciones, incluida la suya, durante el anterior período de sesiones hicieron hincapié en la relación problemática entre la objeción persistente y las normas de *ius cogens*. Si bien las normas de *ius cogens* son indudablemente aplicables a todos los Estados sin excepción, el papel del objetor persistente en la formación de esas normas no es del todo claro. Lógicamente, una norma no puede ser universalmente aplicable si es objeto de una objeción persistente; sin embargo, de conformidad con el proyecto de conclusión 7, párrafo 2, la aceptación y el reconocimiento por todos los Estados no son necesarios para identificar una norma como norma de *ius cogens*.

65. Tal vez la Comisión ha decidido emplear el enfoque del Comité de Redacción en la Conferencia de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que incluyó en

el artículo 53 la referencia a la aceptación y el reconocimiento por la comunidad internacional “en su conjunto” para indicar que “ningún Estado en particular debe tener derecho de veto”. Ello parece excluir a los objetores persistentes de la formación de las normas de *ius cogens*. Con todo, incluso esa cuestión requiere elucidación, pues si la objeción persistente de un Estado no obstaculiza el nacimiento de una norma de *ius cogens*, ese Estado terminaría vinculado por una norma que ha surgido, no solo sin su acuerdo, sino también contra su voluntad claramente expresada. Esa situación es contraria a la naturaleza misma del derecho internacional y, en particular, al principio de la igualdad soberana de los Estados, y exige un examen muy estrecho y circunspecto por parte de la Comisión.

66. El texto del párrafo 4 del proyecto de conclusión 5 (Normas de *ius cogens* como normas de derecho internacional general) simplifica y distorsiona la función de los tratados internacionales como fuente de *ius cogens*. En su segundo informe (A/CN.4/706), el Relator Especial ha rastreado cuidadosamente la relación entre el derecho internacional consuetudinario y el derecho de los tratados. Es cierto que un tratado internacional puede reflejar y ayudar a cristalizar la formación de una norma de derecho internacional consuetudinario y también servirle de base. Sin embargo, el párrafo 4 se refiere únicamente a un aspecto de esa relación: que un tratado puede reflejar una norma de derecho internacional general apta para adquirir el rango de norma de *ius cogens*. Si bien la Comisión insiste muchas veces en la necesidad de interpretar los textos que prepara junto con los comentarios correspondientes, una relación importante como la que existe entre el derecho internacional consuetudinario y el derecho de los tratados debería definirse claramente en el texto mismo.

67. En cuanto al proyecto de conclusión 8, el orador dice que debe armonizarse el uso de los términos “aceptación y reconocimiento” y aclararse la relación entre aceptación y reconocimiento. Ello es tanto más importante cuanto que la Comisión ha indicado, en relación con el tema de la identificación del derecho internacional consuetudinario, que el elemento subjetivo del derecho internacional consuetudinario se refiere a la convicción jurídica y no al consentimiento formal. La idea de “aceptación formal” se transmite mejor si se habla de “consentimiento formal”, en tanto el término “convicción jurídica” se puede transmitir mejor con la palabra “reconocimiento”. La traducción al ruso de los términos “aceptación” y “reconocimiento” no se corresponde con el sentido en que se utilizan dichos términos en las versiones francesa e inglesa.

68. En cuanto al proyecto de conclusión 9, el orador está de acuerdo en que la condena persistente de determinados actos y la aprobación por unanimidad de resoluciones en las organizaciones internacionales puede servir como prueba de la existencia de normas de *ius cogens*. Por otra parte, las resoluciones de las organizaciones internacionales y de las declaraciones que se hacen en dichas organizaciones no pueden ser fuentes de normas jurídicas, incluido el *ius cogens*, aunque puedan ser de utilidad para identificar esas normas. A ese respecto, el orador hace suyas las opiniones expresadas por algunos miembros de la Comisión de que es incorrecto afirmar que las decisiones de las cortes y tribunales son prueba del *ius cogens*, ya que existen como medio auxiliar para la identificación de dichas normas. La redacción de los párrafos 3 y 4 del proyecto de conclusión debería ajustarse en consecuencia. Por último, es importante incluir en el proyecto de conclusiones algunas características específicas de las normas de *ius cogens*, que facilitarán su identificación, incluso el hecho de que no son susceptibles de modificación, salvo por otra norma de *ius cogens*.

69. En cuanto al tema de la sucesión de Estados en relación con la responsabilidad del Estado, el orador dice que su delegación apoya el objetivo básico de la labor de la Comisión, a saber, la identificación de las normas del derecho internacional que rigen tanto la transmisión de obligaciones como la transmisión de derechos resultantes de la responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos. El formato de un proyecto de artículos con comentarios será la mejor manera de asegurar la coherencia en la labor de la Comisión. En cuanto a la metodología, debe hacerse máximo hincapié en el análisis de la práctica actual.

70. Su delegación se inclina a hacer suya la conclusión del Relator Especial de que el derecho internacional moderno no apoya la teoría general de no sucesión en relación con la responsabilidad del Estado. Esa teoría podría haber sido válida en el contexto de la descolonización (*tabula rasa*), pero no hoy día. El repudio por un Estado sucesor de toda responsabilidad derivada de los actos internacionalmente ilícitos de un Estado predecesor no está en consonancia con el estado de derecho en las relaciones internacionales y puede entrañar el repudio por parte de otros Estados, en particular los Estados lesionados, de su responsabilidad respecto del Estado sucesor. Los derechos y beneficios obtenidos por el Estado sucesor en el marco de la sucesión deben ir acompañados de responsabilidad internacional.

71. Su delegación está a favor de estudiar la forma en que la sucesión de Estados guarda relación con las organizaciones internacionales y la responsabilidad de los Estados con respecto a los hechos de una organización internacional que ya no exista. La determinación de una tendencia en esa esfera será difícil y entrañará en gran medida el desarrollo progresivo del derecho internacional. Los resultados de la Comisión deben ser normas que han de ser aplicadas y ajustadas por los Estados interesados en ausencia de un acuerdo especial entre el Estado predecesor y el Estado sucesor.

72. Además de estudiar la práctica internacional, también será útil examinar la forma en que podrían aplicarse las analogías derivadas de la legislación nacional, por ejemplo, cesión, deudas, responsabilidad por daños, etc. Es importante recordar que, en ausencia de normas universales en esa esfera, un Estado sucesor esté dispuesto o no a asumir las obligaciones del Estado predecesor es un hecho que se tiene en cuenta al tiempo de considerar la cuestión de su reconocimiento. También, en la etapa actual de los trabajos, se precisa una clasificación de los actos internacionalmente ilícitos.

73. En cuanto al proyecto de artículos propuesto por el Relator Especial, el orador está de acuerdo con los miembros de la Comisión que han propuesto la inclusión en el proyecto de artículo 1 (Alcance) de una referencia a la sucesión “respecto de los derechos y obligaciones dimanantes de un hecho internacionalmente ilícito”, ya que ayudaría a centrar el alcance del tema. También facilitará la labor futura sobre el texto. En cuanto al posible examen de la sucesión de gobiernos, incluida la sucesión lícita o ilícita con arreglo al derecho internacional, el orador dice que, aunque será una tarea compleja y delicada, su delegación está totalmente a favor de que se lleve a cabo, ya que actualmente es de importancia fundamental.

74. En el proyecto de artículo 2 (Términos empleados) deben definirse todos los términos que se utilizarán en el proyecto de artículos.

75. En cuanto al proyecto de artículo 3 (Pertinencia de los acuerdos para la sucesión de Estados en materia de responsabilidad), el orador quiere saber en qué lógica se funda la inclusión de los párrafos 1 y 2. Los acuerdos de sucesión son las opciones más apropiadas y deseables para los Estados interesados, y deberían quedar abarcados por las disposiciones de la sección 4 (Los tratados y los terceros Estados) de la Convención de Viena. Por lo menos, el párrafo 1 del proyecto de artículo 3 debe revisarse en el entendimiento de que, en ausencia de objeciones por parte de terceros Estados que sean beneficiarios de los derechos de que se trate, las obligaciones del Estado predecesor se transmiten al

Estado sucesor en virtud de su acuerdo sobre la sucesión. En el párrafo 4 se debe indicar que los acuerdos entre Estados sobre la sucesión se rigen por los artículos 34 a 36 de la Convención de Viena, teniendo debidamente en cuenta las características específicas de sus respectivos sistemas jurídicos y su condición de sujetos de derecho.

76. Belarús apoya el proyecto de artículo 4 (Declaración unilateral de un Estado sucesor), aunque se podría simplificar el texto del párrafo 2. Mencionar en el comentario la labor de la Comisión sobre los actos unilaterales de los Estados sería conducente a un enfoque sistémico y a la aceptación del proyecto de artículo.

77. **La Sra. Puerschel** (Alemania), refiriéndose al tema de las normas imperativas de derecho internacional general (*ius cogens*), dice que su delegación comparte las preocupaciones expresadas por otros Estados en relación con la falta de una práctica pertinente de los Estados. Alemania se inclina en favor de un enfoque prudente.

78. En cuanto a los proyectos de conclusión aprobados provisionalmente por el Comité de Redacción, Alemania está de acuerdo con el razonamiento general del proyecto de conclusión 5: debe ser fundamentalmente el derecho internacional consuetudinario, y no el derecho derivado de los tratados o de otras fuentes, lo que constituya derecho internacional general y, por lo tanto, sirva de base al *ius cogens*. Las normas de los tratados solo excepcionalmente reflejan normas imperativas de derecho internacional general, pero esto no se expresa suficientemente bien en el proyecto de conclusión y se debería aclarar en el texto de la conclusión o en el comentario correspondiente.

79. En cuanto al otro criterio para identificar el *ius cogens*, a saber, la aceptación y el reconocimiento por la comunidad internacional de Estados en su conjunto de que una norma es inderogable, la oradora dice que, en vista de las graves consecuencias de la identificación de una norma de *ius cogens*, deben aplicarse los criterios más estrictos. Alemania acoge con satisfacción que en el proyecto de conclusión 7 se precise que “la aceptación y el reconocimiento por una gran mayoría muy amplia de los Estados son necesarios para la identificación de una norma como norma imperativa de derecho internacional general”. Sin embargo, esa frase deja demasiado margen para la interpretación, y es aconsejable aclararla en el comentario. Como Alemania ha declarado durante el examen de la labor de la Comisión sobre la identificación del derecho internacional consuetudinario, la falta de una respuesta concreta por parte de los Estados a la proclamación de

una norma de *ius cogens* hecha por otros solo debería indicar la aceptación de una norma si las circunstancias exigen una reacción.

80. En cuanto a la cuestión de si el *ius cogens* regional debería mencionarse en el proyecto de conclusiones, Alemania no considera necesario que la Comisión se ocupe de esta cuestión en el marco del proyecto en la etapa actual.

81. En relación con el proyecto de conclusión 9, la oradora dice que Alemania asigna gran importancia a la contribución de la Comisión a la determinación y el desarrollo progresivo del derecho internacional y valora la excelente calidad de su labor. No obstante, la mención explícita de la labor de la Comisión en el proyecto de conclusión parece cuestionable. Asimismo, contrasta con las conclusiones de la Comisión sobre el tema titulado “Identificación del derecho internacional consuetudinario” en las cuales la labor de la Comisión se menciona únicamente en el comentario.

82. Por último, Alemania no considera necesario que la Comisión se embarque en la tarea enormemente difícil de adoptar una lista enumerativa de las normas que han adquirido el rango de *ius cogens*. Incluso si fuera solo ilustrativa, dicha lista podría dar lugar a conclusiones erróneas y se corre el riesgo de establecer un *statu quo* que pueda obstaculizar la evolución del *ius cogens* en el futuro.

83. *El Sr. Gafoor (Singapur) ocupa la Presidencia.*

84. **La Sra. Hořňáková** (Chequia) dice que las normas de *ius cogens* surgen únicamente sobre la base del consentimiento de los Estados y en el momento en que son identificadas por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como normas imperativas. Chequia, por lo tanto, apoya el párrafo 1 del proyecto de conclusión 5, aprobado provisionalmente por el Comité de Redacción, en el que se indica que “la base más común” para la formación del *ius cogens* es el derecho internacional consuetudinario; sin embargo, tiene dudas acerca de si las disposiciones de los tratados y los principios generales del derecho pueden servir también como base para las normas imperativas de derecho internacional general, como se indica en el párrafo 2.

85. En cuanto al tema titulado “La sucesión de Estados en relación con la responsabilidad del Estado”, la oradora dice que ha llegado el momento de analizar el antiguo dogma a tenor del cual la posibilidad de invocar la responsabilidad por un hecho internacionalmente ilícito cometido por o contra un Estado predecesor desaparece ante la sucesión de los Estados. Esa opinión, común en la bibliografía tradicional y que algunos todavía propugnan, se basa en gran medida en una comprensión de la responsabilidad del Estado que es

muy diferente del concepto en que se sustentan los artículos de la Comisión sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos. Además, desde hace ya algún tiempo, se acepta en general que la sucesión de Estados no es necesariamente una *tabula rasa* en términos de las relaciones dimanadas de los tratados y las deudas. Se plantea, pues, la cuestión de saber por qué la sucesión de los Estados ha de borrar las consecuencias de un hecho internacionalmente ilícito.

86. Su delegación está de acuerdo con el Relator Especial en que el derecho internacional contemporáneo no excluye la sucesión en materia de derechos y obligaciones secundarios derivados de un hecho internacionalmente ilícito del Estado y lo alienta a que considere la posibilidad de formular una disposición general que plasme esa teoría. Ese sería, claro está, solo un punto de partida en el más complejo proceso encaminado a responder a las cuestiones de si están surgiendo ciertas normas de derecho internacional que sustentan la transmisión de obligaciones o derechos secundarios derivados de hechos internacionalmente ilícitos de los Estados en situaciones de sucesión de Estados y de si existen perspectivas para su desarrollo progresivo y codificación.

87. En cuanto al proyecto de artículo 1 (Alcance), propuesto por el Relator Especial, la oradora dice que su delegación está satisfecha con su contenido. En vista de la relación que existe entre este tema y la labor anterior de la Comisión sobre la sucesión de Estados y la responsabilidad del Estado, Chequia también está de acuerdo en que es preciso emplear definiciones sustancialmente idénticas. Ello es vital para una comprensión adecuada de los diferentes instrumentos y su interacción, y es también un requisito previo para preservar la armonía entre los resultados de la labor de la Comisión sobre el presente tema y su labor anterior sobre temas conexos.

88. La oradora observa con satisfacción que el proyecto de artículo 2 (Términos empleados) incorpora literalmente las definiciones más pertinentes de las Convenciones de Viena de 1978 y 1983 sobre la sucesión de Estados. A diferencia de esas Convenciones, los artículos de la Comisión sobre la responsabilidad del Estado no contienen una disposición relativa a los términos empleados y, por lo tanto, no ofrecen una definición de los términos técnicos “responsabilidad internacional” y “responsabilidad del Estado”. Es atinada, pues, la decisión de omitir la definición del término “responsabilidad internacional” en el proyecto de artículo 2. La Comisión podría simplemente llevar a cabo su labor fundada en el entendimiento de que la responsabilidad del Estado por hechos

internacionalmente ilícitos ya está contemplada en los artículos de 2001 sobre la responsabilidad del Estado.

89. En lo que respecta a la orientación de la labor futura, la oradora dice que, si bien deben tenerse en cuenta las particularidades de los diferentes tipos de sucesión de Estados, como la transferencia de una parte del territorio, la secesión, la disolución, la unificación y la creación de un nuevo Estado independiente, la estructura del proyecto de artículos no debe necesariamente seguir al pie de la letra la estructura de las Convenciones de Viena de 1978 y 1983. Por el contrario, debe girar en torno a elementos específicos de la responsabilidad del Estado: por ejemplo, la forma en que las disposiciones sobre la responsabilidad del Estado, la restitución, la indemnización y la satisfacción se traducen en el contexto de la sucesión de Estados; la forma en que se aplicarán en relación con un Estado sucesor o con Estados sucesores; y la forma en que se aplicarán si el Estado predecesor sigue existiendo, pero los medios para la restitución solo están al alcance del Estado sucesor o requerirán la acción conjunta del Estado predecesor y del Estado sucesor o la de dos o más Estados sucesores. La Comisión también debe examinar si existe o en qué circunstancias existe un papel para la indemnización entre los Estados sucesores o entre el Estado predecesor y el Estado sucesor o los Estados sucesores, en situaciones en las que uno de ellos cumple íntegramente una obligación secundaria (por ejemplo, la restitución) en relación con el Estado lesionado. Un conjunto similar de cuestiones se plantea en las situaciones en que el Estado predecesor es la víctima de un hecho internacionalmente ilícito de otro Estado.

90. Por último, en relación con el tema titulado “Protección del medio ambiente en relación con los conflictos armados”, la oradora señala que la Comisión no lo ha inscrito en su programa con miras a su desarrollo progresivo y codificación y nunca ha indicado su intención de elaborar un instrumento jurídicamente vinculante. Si hubiera necesidad de enmendar los instrumentos existentes, esa tarea debería ser asumida, en los casos que correspondan, por los Estados partes en esos instrumentos y no por la Comisión. En el supuesto de que tuviera intención de seguir trabajando en un conjunto de principios o normas ya contenidos en los instrumentos jurídicos existentes que se refieran a la protección del medio ambiente y sean aplicables en los conflictos armados, la Comisión debería explicar cuál es el valor de esa labor y, en particular, la forma en que una mera recopilación de las disposiciones de los instrumentos jurídicos existentes podría “mejorar” la protección del medio ambiente en el contexto de los conflictos armados, como lo pretende el proyecto de principio 2. Se deben tener debidamente

presentes los riesgos derivados de una recopilación selectiva o incompleta.

91. **El Sr. Hitti** (Líbano) dice que, desde hace casi 70 años, la Comisión viene elucidando aspectos del derecho internacional, y algunos de sus trabajos han impartido una valiosa orientación a muchos Estados. Se debe prestar atención a no sobrecargarla con más cuestiones de las que puede atender.

92. En cuanto a la protección del medio ambiente en relación con los conflictos armados, el orador recuerda la posición de su delegación de que se deben estudiar los siguientes temas, a saber: la responsabilidad y la obligación de ofrecer reparación; la aplicación de los principios de proporcionalidad y diligencia debida en el contexto del medio ambiente; las consecuencias humanitarias de los efectos de los conflictos armados en el medio ambiente; y la protección del medio ambiente en situaciones de ocupación.

93. **El Sr. Shin** Seoung Ho (República de Corea), refiriéndose a la sucesión de Estados en relación con la responsabilidad del Estado, dice que su delegación reconoce la necesidad de que haya armonía entre ese tema y los trabajos anteriores de la Comisión relacionados con esferas conexas de la responsabilidad y la sucesión, y prevé que el presente tema podría colmar algunas de las lagunas que quedan en esas esferas. En cuanto al proyecto de artículos propuesto por el Relator Especial, su delegación apoya la decisión de la Comisión, por un lado, de excluir las cuestiones de la responsabilidad internacional por las consecuencias lesivas dimanantes de actos no prohibidos por el derecho internacional en el proyecto de artículo 1 (Alcance), y, por el otro, de limitar el tema a la sucesión de la responsabilidad por los derechos y obligaciones con respecto a los hechos internacionalmente ilícitos.

94. En cuanto al proyecto de artículo 2, relativo a los términos empleados, su delegación ha tomado nota de su compatibilidad con las Convenciones de Viena de 1978 y 1983 sobre la Sucesión de Estados. Las definiciones de los términos enunciadas en el proyecto de artículo 2, apartados a) a d), a saber, “sucesión de Estados”, “Estado predecesor”, “Estado sucesor” y “fecha de la sucesión de Estados”, son las mismas que figuran en el artículo 2, apartados b) a e), de la Convención de Viena de 1978.

95. Para la labor futura sobre el tema, la cuestión clave es determinar si las normas generales sobre la sucesión de Estados existen o no, en particular cuando los tipos de sucesión de Estados son diferentes. Puede haber dos enfoques. El primero es determinar, sobre la base de la norma tradicional de la no sucesión, cuándo, en casos excepcionales, las obligaciones y derechos de un Estado

predecesor se transmiten al Estado sucesor. El segundo es apartarse de la norma tradicional de la no sucesión y tratar de encontrar una norma general aplicable a diferentes tipos de sucesión de Estados. La Comisión debe examinar la cuestión en detalle en su próximo período de sesiones.

96. Categorizar la sucesión de Estados no es tarea sencilla. Las Convenciones de Viena de 1978 y 1983 emplean, en la versión en inglés, la expresión “uniting of States”, mientras que, en el proyecto de artículos sobre la nacionalidad de las personas naturales en relación con la sucesión de Estados, aprobados por la Comisión en 1999, la categoría pasa a denominarse “unification of States”. Su delegación también ha señalado que el proyecto de resolución sobre el mismo tema aprobado por el Instituto de Derecho Internacional en 2015 se refiere a la fusión de Estados y a la incorporación de un Estado a otro Estado ya existente, en lugar de utilizar la formulación amplia de unificación de Estados.

97. **El Sr. Şen** (Turquía), refiriéndose a la cuestión de las normas imperativas de derecho internacional general, dice que su Gobierno sigue abrigando dudas acerca de si hay una necesidad de codificación o desarrollo progresivo del concepto. El Relator Especial ha cambiado el nombre del tema a “Normas imperativas de derecho internacional general (*ius cogens*)”, que es más compatible con el artículo 53 de la Convención de Viena de 1969. Turquía no ve ninguna ventaja en la elaboración de una lista de normas de *ius cogens*, incluso si la lista es ilustrativa y no exhaustiva. Será una tarea que insumirá mucho tiempo a la Comisión, que debería, en cambio, dedicarse a elaborar una metodología para la identificación de esas normas.

98. En cuanto a los seis proyectos de conclusión propuestos por el Relator Especial, su delegación considera que los criterios relativos al *ius cogens* enunciados en el proyecto de conclusión 4 están en consonancia con el artículo 53 de la Convención de Viena de 1969. El proyecto de conclusión 6 se limita a reiterar el proyecto de conclusión 4, en el sentido de que se precisan la aceptación y el reconocimiento de la comunidad internacional en su conjunto, y se debe o bien suprimirlo o bien desarrollarlo aún más. El proyecto de conclusión 7, párrafo 2, también debe suprimirse, a fin de mantener la claridad del párrafo 1. Como se dice en el párrafo 1, son justamente la aceptación y el reconocimiento de la comunidad de Estados en su conjunto los criterios pertinentes para la identificación de las normas de *ius cogens*.

99. En cuanto al tema de la sucesión de Estados en relación con la responsabilidad del Estado, el orador dice que la divergencia de los comentarios y

observaciones hechos por el Relator Especial en su primer informe sobre el tema, así como en el informe de la Comisión a la Asamblea General, confirma las preocupaciones y dudas de su Gobierno debido a la complejidad e inmadurez del tema. La complejidad surge del hecho de que el tema está integrado por dos componentes, ninguno de los cuales se ha resuelto completamente en los contextos jurídico y político. Además, no está claro qué parte del tema es o debería ser objeto de derecho internacional o qué parte es de carácter político. El tema, pues, no se presta a ser generalizado o regulado de una forma determinada. Las divergencias teóricas entre las opiniones del Relator Especial y las de algunos Estados confirman la vaguedad intrínseca acerca de la naturaleza política y jurídica del tema.

100. En cuanto a la referencia que se hace en el primer informe a la labor anterior de la Comisión sobre la sucesión de Estados y la responsabilidad del Estado, el orador recuerda que el resultado de la labor de la Comisión sobre la sucesión de Estados ha encontrado un apoyo limitado entre los Estados. De hecho, debido a la prolongada renuencia de los Estados a defender los artículos sobre la nacionalidad de las personas naturales en relación con la sucesión de Estados, la aprobación del texto pertinente ha tenido que ser aplazada indefinidamente. Del mismo modo, la Convención de Viena de 1978 es vinculante solo para un número limitado de Estados, y la Convención de Viena de 1983 aún no ha entrado en vigor. Por lo tanto, esas normas distan mucho de ser aceptadas como derecho consuetudinario o normas internacionales generales. Aunque menciona la falta de normas universales en relación con la sucesión de Estados y aduce que solo hay varios ámbitos jurídicos a los que se aplica la sucesión de Estados, el Relator Especial prefiere volver a los principales términos y definiciones utilizados en ambas Convenciones, y lo justifica con el argumento de que la adopción de ciertos términos y definiciones no implica que la totalidad o la mayoría de las normas de ambas Convenciones de Viena sean aplicables al presente tema.

101. El panorama inicial descrito en el primer informe implica la ausencia de la práctica concertada de los Estados que es precisa para la codificación. Su delegación, pues, abriga dudas de que pueda lograrse el objetivo declarado del Relator Especial, incluidos tanto el desarrollo progresivo de nuevas normas como la codificación.

102. También hay incertidumbre respecto del segundo componente del tema, a saber, la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, cuyos conceptos fundamentales no han cristalizado en el derecho internacional. Los artículos de 2001 sobre la

responsabilidad del Estado no pueden tomarse como el solo fundamento para una codificación en un nuevo ámbito. Por consiguiente, si desea utilizar algunos de esos artículos de manera selectiva en relación con el tema, el Relator Especial debe demostrar que su contenido refleja la aceptación amplia de los Estados en los casos particulares de sucesión de Estados.

103. En cuanto a la propuesta del Relator Especial sobre normas supletorias, el orador dice que, teniendo en cuenta la persistente renuencia de los Estados en relación con los artículos de 2001 sobre la responsabilidad del Estado, su delegación no está plenamente convencida de que esa propuesta pueda suscitar un amplio apoyo.

104. En cuanto al tema de la protección del medio ambiente en relación con los conflictos armados, el orador señala a la atención la importancia de la coherencia entre la labor realizada hasta la fecha sobre el tema y la labor futura en que se embarcará la nueva Relatora Especial. Su delegación desea el mayor de los éxitos a la nueva Relatora Especial en la conclusión de la labor sobre este aspecto importante del derecho internacional.

105. **El Sr. Smith** (Reino Unido) dice que la labor de la Comisión sobre el tema de las normas imperativas de derecho internacional general (*ius cogens*) es una oportunidad para aportar claridad y asistencia a los juristas, en particular a los tribunales nacionales que tengan ante sí la tarea de identificar y determinar los efectos jurídicos de las normas de *ius cogens*. Dicha labor debe centrarse en la identificación de las normas relativas a la formación, la aplicación y los efectos jurídicos de las normas de *ius cogens*. La complejidad y la controversia radican en la determinación del proceso para la identificación de esas normas y la importancia de estas una vez identificadas. Si bien los tratadistas concuerdan en cuanto a la existencia del *ius cogens*, en muchos aspectos allí es donde la unidad toca a su fin. La labor de la Comisión sobre el tema, pues, puede influir en la forma en que la comunidad internacional regula sus actos, pero también puede dividir a los Estados. Esas circunstancias son las que llevan al Reino Unido a reafirmar su apoyo a la labor de la Comisión sobre el tema, al tiempo que la insta a proceder con gran cautela.

106. En cuanto a los proyectos de conclusión, el orador dice que su delegación no considera que el proyecto de conclusión 2 sea útil por varias razones. No es realista tratar de reflejar con exactitud, en el proyecto de conclusiones, las razones en que se fundamenta el *ius cogens*. Se trata de una cuestión controvertida y esencialmente teórica que es innecesario abordar, incluso en la forma preliminar en que ahora se la propone. Si bien las normas de *ius cogens* pueden

reflejar y proteger los valores fundamentales de la comunidad internacional y poseer un rango jerárquicamente superior, el proyecto de conclusión 2 no ayuda a impartir la claridad y la asistencia técnica que serían de mayor utilidad práctica para los Estados y los juristas. Además, es imprescindible mantener una clara distinción entre los elementos descriptivos, por una parte, y los criterios de identificación y las consecuencias de la identificación, por la otra. Fusionar ambas cosas podría entenderse como una intención de los Estados de modificar el significado y el efecto de la definición enunciada en el artículo 53 de la Convención de Viena de 1969.

107. Dicho aspecto lo ilustran el término subjetivo “valores fundamentales” y la terminología conexas. El Relator Especial sostiene en el párrafo 22 de su segundo informe que nunca se ha puesto seriamente en entredicho la idea de que las normas de *ius cogens* “reflejan” o “protegen” valores fundamentales. Tampoco es importante la distinción que se hace en la doctrina entre “intereses fundamentales” y “valores fundamentales”. La idea general, señala el Relator Especial, es la misma. El Reino Unido acepta ese argumento, pero lo que se necesita no es una mera “idea general” sino un análisis preciso que refleje la práctica de los Estados. Además, la expresión “valores fundamentales” puede o bien diluir los elementos constitutivos del *ius cogens* o introducir un nuevo elemento, con lo cual se haría aún más difícil la identificación de las normas de *ius cogens*. En uno y otro caso se socavaría el rango del *ius cogens* en el ordenamiento jurídico internacional o se dejaría la puerta abierta a los abusos.

108. Así pues, la inclusión de un párrafo descriptivo como el proyecto de conclusión 2 hace correr el riesgo de que el proyecto entre en el ámbito de la pura normatividad, con el peligro de que no se logre el consenso entre los Estados sobre cuestiones de interés práctico. Una exposición de los “elementos descriptivos y característicos” del *ius cogens* bien puede tener cabida en el comentario al proyecto de conclusiones, pero carece de valor práctico, e incluso hay riesgo en incorporarla a los propios proyectos de conclusión.

109. En relación con el proyecto de conclusión 5, el orador dice que su delegación toma nota del hecho de que la redacción de ese proyecto de conclusión refleja el artículo 53 de la Convención de Viena de 1969, en particular por el uso de las palabras “norma” y “derecho internacional general”. Por consiguiente, acoge con beneplácito la inclusión en el programa de trabajo a largo plazo de la Comisión del tema titulado “Principios generales del derecho”, una razón más para proceder con cautela en cuanto al tema del *ius cogens*, ya que

existe cierta yuxtaposición entre ambos y podría haber necesidad de asegurar la coherencia.

110. Los proyectos de conclusión 6 y 7 en relación con el proceso de la aceptación y el reconocimiento del *ius cogens* dejan varias cuestiones sin resolver. Aunque el derecho internacional consuetudinario debe ser demostrado por la práctica de los Estados y también por la *opinio juris*, no hay ningún requisito correlativo en el proyecto de conclusiones para identificar las normas jerárquicamente superiores del *ius cogens*. Es extraño que el orden jurídico superior del *ius cogens* se haya de formar sobre la base de un umbral inferior.

111. Del mismo modo, el criterio de la aceptación y el reconocimiento de la “comunidad internacional de Estados en su conjunto” conforme al artículo 53 de la Convención de Viena parece haberse diluido al nivel de “una gran mayoría muy amplia” indefinida de Estados. Si bien captar el significado exacto de la expresión “comunidad internacional de Estados en su conjunto” es ciertamente difícil, el empleo de la palabra “mayoría”, con independencia de los calificativos que la acompañen, parece implicar algo menos que el conjunto. El Relator Especial dice en sus informes que el artículo 53 fue el punto de partida de la labor; sin embargo, el Reino Unido siempre ha considerado que la labor no debe nunca apartarse de la definición enunciada en ese artículo y debe ser coherente con la norma que contiene.

112. En cuanto a la sucesión de Estados en relación con la responsabilidad del Estado, el orador señala que la práctica de los Estados es muy exigua para orientar a la Comisión en esa esfera. La práctica de los Estados identificada por el Relator Especial en su informe depende mucho del contexto y es muy sensible a cada contexto, y se la debe considerar en su contexto histórico, político y cultural. En lugar de revelar tendencias discernibles de aplicación universal, la práctica identificada tiende a demostrar lo contrario. La sucesión de la responsabilidad del Estado guarda relación con decisiones normativas —y por cierto políticas— que se vinculan con el núcleo de la identidad de los Estados interesados. Muchos de los argumentos del Relator Especial se adentran a todas luces en el territorio de la formulación de normas sustantivas, esto es, de *lex ferenda*. La Comisión debe ser absolutamente clara en cuanto a saber si está enunciando *lex lata* o si está embarcada en una labor de *lex ferenda*.

113. El Reino Unido mantiene una actitud abierta en cuanto a la utilidad de los trabajos sobre el tema. Una opción puede ser la de elaborar cláusulas modelo de las que puedan valerse los Estados en una situación de sucesión como punto de partida para determinar dónde radica la responsabilidad del Estado. Algo más

prescriptivo hará correr el riesgo de no contar con la aprobación de los Estados.

114. En cuanto al tema de la protección del medio ambiente en relación con los conflictos armados, el Reino Unido desea recordar los tres puntos que señaló durante el examen del tema por la Comisión en 2016: la Comisión no debe tratar de modificar el derecho de los conflictos armados; si bien la elaboración de directrices o principios no vinculantes puede ser útil, el Reino Unido no está persuadido de la necesidad de nuevas disposiciones convencionales en la materia; y el derecho internacional humanitario es *lex specialis* en el ámbito de la protección del medio ambiente en relación con los conflictos armados.

115. La Sra. Ahamad (Malasia) dice que, si bien Malasia apoya los esfuerzos del Relator Especial por aclarar la cuestión de las normas imperativas de derecho internacional general (*ius cogens*), lo alienta a realizar un análisis exhaustivo del artículo 53 de la Convención de Viena de 1969, en el que se basan los proyectos de conclusión, pues el elemento de modificación que existe en virtud de esa disposición no ha sido incluido en su segundo informe. En relación con el proyecto de conclusión 5, Malasia es de la opinión de que se necesitan más aclaraciones sobre el empleo del artículo 38, párrafo 1, del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia como fundamento para la determinación de las normas de *ius cogens* y también es preciso saber si se requiere el reconocimiento de toda la comunidad internacional de Estados. Con respecto al proyecto de conclusión 9, Malasia desea subrayar que la labor de los órganos de expertos y la doctrina como medio secundarios para identificar una norma de derecho internacional general como norma de *ius cogens* debe depender del reconocimiento de toda la comunidad internacional de Estados. Malasia aguarda con interés la labor del Relator Especial en relación con la doctrina del objeto persistente y la aplicación de las normas de *ius cogens* a nivel regional o bilateral.

116. Malasia apoya la inclusión del nuevo tema de la sucesión de Estados en relación con la responsabilidad del Estado en el programa de trabajo de la Comisión, pues colmará las lagunas del derecho relacionado con la sucesión de Estados y la responsabilidad del Estado que se habían dejado para su desarrollo en el futuro después de los esfuerzos de la Comisión que dieron cima en la aprobación de las Convenciones de Viena de 1978 y 1983 sobre la sucesión de Estados. Malasia acoge con beneplácito que la Comisión haya restringido el alcance del tema a la transmisión de derechos y obligaciones dimanantes de hechos internacionalmente ilícitos, excluyendo las cuestiones referentes a la responsabilidad internacional por las consecuencias

lesivas derivadas de actos no prohibidos por el derecho internacional y de la responsabilidad de las organizaciones internacionales.

117. En su primer informe ([A/CN.4/708](#)), el Relator Especial realizó un estudio preliminar de la práctica de los Estados y examinó de manera relativamente sustantiva la cuestión de si existe una norma general de no sucesión o de sucesión, pero no dio ninguna respuesta concreta sobre el asunto. Por lo tanto, es esencial abordar claramente la cuestión relativa a saber si existe una norma general de esa índole aplicable a los distintos tipos de sucesión de Estados en materia de derechos y obligaciones derivados de la responsabilidad del Estado. Esa labor debería llevarse a cabo con anterioridad al examen de posibles excepciones o cláusulas de salvaguardia, como las enunciadas en los proyectos de artículos 3 y 4. Por otra parte, al examinar la cuestión del principio general que rige la sucesión de Estados en relación con la responsabilidad del Estado, el Relator Especial ha hecho más hincapié en la práctica de los Estados en los países de Europa y no en la de países de otras regiones. En consecuencia, el análisis de esa cuestión fundamental parece desproporcionado. A fin de abordar la cuestión de manera integral, es imprescindible analizar la práctica de los Estados en regiones distintas de Europa con miras a incluirla en informes futuros sobre el tema.

118. El proyecto de artículo 1 aclara que el alcance del proyecto de artículos abarca los derechos y obligaciones dimanantes de hechos internacionalmente ilícitos en el caso de la sucesión de Estados. Por ende, la labor futura encaminada a elaborar un proyecto de artículos sobre el tema debe limitarse a ese marco. En relación con el alcance, la oradora recuerda que, actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad estableció el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia, en sus resoluciones 808 (1993) y 827 (1993), y el Tribunal Penal Internacional para Rwanda, en su resolución 955 (1994). A esa luz, Malasia recomienda que la Comisión y el Relator Especial lleven a cabo un estudio amplio de la función del Consejo de Seguridad en relación con los hechos internacionalmente ilícitos de conformidad con sus facultades para mantener la paz y la seguridad internacionales en virtud de la Carta, a fin de cerciorarse de que no haya yuxtaposición entre la labor de la Comisión y la función asignada al Consejo de Seguridad.

119. La importancia del tema de la protección del medio ambiente en relación con los conflictos armados se pone de manifiesto en el constante interés en el tema por parte de los Estados Miembros, así como de organismos internacionales como el Programa de las

Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Aunque ya se ha realizado una labor sustancial, la cuestión de la forma final del proyecto de principios sobre el tema debe ser objeto de un mayor examen más adelante. A ese respecto, la oradora recuerda la posición de su país en cuanto a la estructura, el alcance, el empleo de los términos y la metodología del tema, así como los derechos de los pueblos indígenas, que expresó durante el examen del tema en el septuagésimo primer período de sesiones de la Asamblea General.

120. Malasia aguarda con interés los trabajos que se han de realizar con miras a subsanar lagunas en el proyecto de principios. La protección del medio ambiente en los conflictos armados no debe verse exclusivamente desde la perspectiva del derecho de la guerra. Los elementos de protección previstos para el proyecto de principios deben impartir claridad sobre la aplicabilidad del derecho internacional humanitario, el derecho penal internacional, el derecho ambiental internacional, el derecho de los derechos humanos y el derecho de los tratados y la relación entre esas ramas del derecho. Con ese fin, en el proceso de redacción, se debe seguir haciendo referencia a las cuestiones de la complementariedad con otras ramas pertinentes del derecho internacional.

121. **El Sr. Nguyen** Nam Duong (Viet Nam), refiriéndose al tema de las normas imperativas de derecho internacional general, dice que esas normas están reconocidas en la Convención de Viena de 1969 y en la legislación interna de muchos Estados. Aunque en la legislación de su país en materia de tratados, sancionada en 2016, se reconocen las normas imperativas de derecho internacional que han de respetarse en el marco de la negociación y concertación de tratados internacionales, la identificación de esas normas sigue adoleciendo de falta de claridad. Por lo tanto, Viet Nam alienta a la Comisión a que prosiga sus investigaciones de las cuestiones relacionadas con el *ius cogens* y está de acuerdo en general con los proyectos de conclusión 4 y 5 que figuran en el informe de la Comisión sobre el tema ([A/72/10](#)).

122. Pasando al tema de la sucesión de Estados en relación con la responsabilidad del Estado, el orador dice que es una cuestión complicada respecto de la cual es exigua la práctica en el seno de la comunidad internacional. Al abordar un tema de esa índole, es preciso tener en cuenta una amplia gama de cuestiones, como la responsabilidad frente a las organizaciones internacionales, la responsabilidad por los hechos ilícitos que no son necesariamente una violación del derecho internacional, por ejemplo, la expropiación, la confiscación y el decomiso, y los casos en que tanto el

Estado predecesor como el Estado sucesor existan al mismo tiempo. En opinión de su Gobierno, se echa de ver el predominio de la aplicabilidad del principio de la no sucesión, ya que la práctica de los Estados y la jurisprudencia son insuficientes para arribar a otra conclusión, y la norma de la sucesión de Estados en la responsabilidad se puede considerar como una excepción.

123. En cuanto al tema de la protección del medio ambiente en relación con los conflictos armados, el orador dice que, independientemente de las intenciones de los beligerantes, los conflictos armados tienen efectos graves y duraderos, no solo en la población, sino también en la tierra, el aire, el agua y el ecosistema. A pesar de los decenios transcurridos, los efectos de la guerra en el medio ambiente todavía se sienten muy claramente en Viet Nam, y lo mismo se aplica a todos los conflictos armados que ocurren en todo el mundo. Su país, pues, es muy partidario de que se prosiga la labor sobre el tema a fin de establecer la responsabilidad del Estado en relación con los restos explosivos de guerra, en particular los que han dañado el medio ambiente. La investigación de la Comisión debe complementar el derecho internacional vigente sobre la protección del medio ambiente y las leyes que rigen los conflictos armados, en particular los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales.

124. **El Sr. Celarie Landaverde** (El Salvador), refiriéndose al tema de las normas imperativas de derecho internacional general (*ius cogens*), dice que el análisis histórico desde el inicio de la labor sobre el tema está facilitando la elaboración de criterios para la identificación de las normas de *ius cogens*, tomando a la Convención de Viena de 1969 como punto de partida. Refiriéndose a los proyectos de conclusión propuestos por el Relator Especial, el orador dice que criterios como los propuestos en los proyectos de conclusión 5 y 6 no se basan exclusivamente en el consentimiento; la existencia de normas de *ius cogens* presupone importantes limitaciones a la validez del consentimiento en el derecho internacional, ya que esas normas deben reflejar intereses colectivos esenciales cuya protección implica el imperativo de la superioridad jerárquica, de ahí su inderogabilidad. Es preciso estudiar más a fondo la referencia a los principios generales del derecho en el proyecto de conclusión 5, párrafo 3: si bien son sin duda fundamentales para el cumplimiento de las obligaciones internacionales, y la posibilidad de que sean elementos constitutivos de las normas de *ius cogens* no debe excluirse, hay una amplia gama de opiniones sobre su dinámica. En el proyecto de conclusión 7, párrafo 2, el término “actitudes” debe sustituirse por “convicciones”, que transmite mejor la idea de que uno de los fundamentos del *ius cogens* es el derecho internacional

consuetudinario. En cuanto al proyecto de conclusión 8, su delegación está de acuerdo en que el Relator Especial debe examinar la cuestión de la aquiescencia, como una forma de aceptación y reconocimiento del carácter imperativo de las normas de *ius cogens*. Por último, la elaboración de una lista ilustrativa de las normas será de gran utilidad para el estudio del tema en el futuro.

125. Sobre la sucesión de Estados en relación con la responsabilidad del Estado, un tema complejo respecto del cual será difícil hallar soluciones aceptables para todos los Estados, el orador dice que una de las dificultades es la doctrina tradicional de la no sucesión, a tenor de la cual la responsabilidad nunca puede ser trasladada a un Estado sucesor. Será útil, por ende, realizar un análisis crítico para aclarar los efectos de la sucesión de Estados en relación con la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos. También será útil elaborar un proyecto de artículos sobre el tema, como se ha hecho en el caso de la sucesión de Estados en materia de tratados y en el ámbito económico. A fin de proporcionar una clara explicación de los efectos jurídicos que podrían derivarse de la sucesión, en particular si la personalidad jurídica internacional de los Estados interesados se mantiene o se pierde, es menester tener presentes las diversas formas de sucesión de Estados.

126. En cuanto a al proyecto de artículos propuesto por el Relator Especial en su primer informe, la definición de “sucesión de Estados” en el proyecto de artículo 2 a) no incluye los medios jurídicos mediante los cuales un Estado sustituye a otro como responsable en las relaciones internacionales de un territorio. Esa modificación por medios lícitos y pacíficos es parte integrante de la sucesión de Estados y por lo menos debería mencionarse en el comentario. A fin de mantener la coherencia con la labor anterior de la Comisión, el proyecto de artículo 2 e), o el correspondiente comentario, debería incluir los elementos que constituyen un hecho internacionalmente ilícito de un Estado, a saber, que el comportamiento consistente en una acción u omisión debe ser atribuible al Estado con arreglo al derecho internacional y constituir una violación de una obligación internacional del Estado. También deben incluirse en el texto nuevas definiciones, como las de los elementos que constituyen una declaración unilateral de un Estado sucesor.

127. El orador está de acuerdo con algunos miembros de la Comisión en que los proyectos de artículos 3 y 4 no se remitan todavía al Comité de Redacción, a fin de que el Relator Especial pueda incluir material adicional sobre cuestiones tales como las distintas categorías de sucesión de Estados y el modo en que su regulación

puede afectar los acuerdos de sucesión a los que se hace referencia en el proyecto de artículo 3.

128. Refiriéndose a la protección del medio ambiente en relación con los conflictos armados, el orador dice que su delegación mantiene su postura de abandonar la distinción entre conflictos armados internacionales y conflictos armados no internacionales, ya que ambos pueden causar daños irreversibles al medio ambiente. La delegación de El Salvador sigue apoyando la división del proyecto de principios en fases temporales, pero recomienda obrar con prudencia al trazar líneas divisorias definitivas, ya que siempre habrá obligaciones que se deban cumplir en todo momento.

129. En cuanto a los proyectos de principios aprobados provisionalmente por la Comisión, el orador dice que en el párrafo 2 del proyecto de principio 9 se establece una triple obligación de proteger el medio ambiente natural contra daños extensos, duraderos y graves, pero señala que la palabra “y” debería reemplazarse por la palabra “o”. De ese modo, los Estados no tendrían que esperar a que los daños cumplieran con ese triple criterio acumulativo, pues uno de los tres sería suficiente. Con respecto al párrafo 3, debe tenerse en cuenta que el medio ambiente es naturaleza pública, transnacional y universal, y que su protección debe entrañar las mismas particularidades. Es motivo de constante preocupación que en ese párrafo se acepte que el medio ambiente natural puede ser atacado en caso de haberse convertido en un objetivo militar: debería modificarse la redacción del párrafo, ya que parece hacerse eco automáticamente de la terminología de los bienes civiles y militares. Asimismo, existe una contradicción entre el proyecto de principio 5 y el proyecto de principio 9, párrafo 3, puesto que se permite a los Estados designar zonas de gran importancia medioambiental y cultural como zonas protegidas, mientras que, al mismo tiempo, el principio 9 admite que el medio ambiente pueda ser atacado cuando se haya convertido en un objetivo militar, sin prever ninguna excepción.

130. **El Sr Hirotani** (Japón), refiriéndose al tema titulado “Normas imperativas de derecho internacional general (*ius cogens*)”, dice que su delegación apoya el enfoque del Relator Especial de tratar los elementos del artículo 53 de la Convención de Viena de 1969 como fundamento de los criterios para la identificación del *ius cogens* y de basarse en la práctica de los Estados y las decisiones de los tribunales internacionales para dar contenido y significado al artículo. Sin embargo, dado que las normas de *ius cogens* son normas de derecho internacional general y no se limitan al contexto del derecho de los tratados, el alcance del tema no debe limitarse al derecho de los tratados. Debería prestarse la debida atención a cuestiones relacionadas con otros

ámbitos del derecho, como la responsabilidad del Estado, no solo en el contexto de los efectos o las consecuencias del *ius cogens*, sino también con respecto a su definición, criterios y contenido.

131. Con respecto a la cuestión de si la Comisión debería elaborar una lista ilustrativa de las normas de *ius cogens*, el Japón estima que esa lista puede ser muy útil en la práctica si enuncia las razones y las pruebas en que se ha sustentado la Comisión para considerar que las normas enumeradas en la lista han adquirido el rango de *ius cogens*. Sin embargo, se ha de obrar con prudencia para evitar percepciones erróneas de que las normas enumeradas en la lista tienen un rango jurídico especial distinto del rango de otras normas que también se puedan identificar como normas de *ius cogens*, pero que no estén mencionadas en dicha lista. Es importante aclarar que la lista es ilustrativa y no exhaustiva, y que se entiende sin perjuicio del rango jurídico de las normas que no estén mencionadas.

132. En lo que respecta al examen del *ius cogens* regional, el Japón no está enteramente convencido de la necesidad de estudiar el *ius cogens* que no sea universal. Es preciso elucidar el propósito y la importancia de continuar el examen de la cuestión y se debe estudiar a fondo la relación entre las normas de *ius cogens* y las normas de *ius cogens* regional.

133. En cuanto al tema de la sucesión de Estados en relación con la responsabilidad del Estado, el orador dice que el Japón entiende que el análisis es de carácter preliminar y expresa su esperanza de que continúen las deliberaciones en profundidad en el seno de la Comisión en su próximo período de sesiones. El Japón observa las posibles dificultades que el tema plantea, habida cuenta del número limitado de casos pertinentes y las cuestiones acerca de si existe una práctica suficiente de los Estados en esa esfera. Hay varios tipos de sucesión de Estados y es fundamental estudiar la práctica de los Estados en cada una de esas esferas.

134. El Relator Especial aborda la pertinencia de los acuerdos para la sucesión de Estados en relación con la responsabilidad del Estado en el proyecto de artículo 3 y el efecto de una declaración unilateral de un Estado sucesor en el proyecto de artículo 4. Sin embargo, la estructura de esos textos se complica por la ausencia de una clara orientación sobre los principios generales de la sucesión de Estados en relación con la responsabilidad del Estado. Si la teoría de la no sucesión se ha de emplear como fundamento, los proyectos de artículos 3 y 4 deben centrarse en las condiciones excepcionales en que los acuerdos de sucesión y las declaraciones unilaterales pueden dar lugar a sucesión en la responsabilidad. En su primer informe (A/CN.4/708), el Relator Especial indicó que la teoría

de la no sucesión ya no ocupa una posición dominante. Con todo, como han señalado varios miembros de la Comisión, los casos descritos en el informe no son suficientes para respaldar ese argumento. En consecuencia, el Japón espera que se lleve a cabo un análisis más detallado de los principios generales que orientan la sucesión en relación con la responsabilidad del Estado. En la etapa actual, es preciso abstenerse de abordar cuestiones como la de la responsabilidad derivada de actos no prohibidos por el derecho internacional, la responsabilidad de las organizaciones internacionales y la sucesión de los gobiernos a fin de evitar que se acreciente el volumen de trabajo sobre el tema.

135. **El Sr. Mhura** (Malawi), hablando sobre los crímenes de lesa humanidad, dice que la Comisión debería seguir estudiando las referencias en el proyecto de artículos al derecho de las víctimas a recibir reparación. La cuestión que merece un examen más detenido en relación con el proyecto de artículo 12 (Víctimas, testigos y otras personas) es el grado en que los Estados han de asumir la carga de las reparaciones, en vista de las dificultades que podrían acompañar al cumplimiento de esa obligación.

136. Con respecto a la inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los funcionarios del Estado, su delegación observa con preocupación que ha habido un alejamiento del procedimiento establecido de la Comisión de aprobar su labor por consenso. El proyecto de artículo 7 enumera las excepciones a la inmunidad, en la forma de delitos a los que esta no se aplica. El hecho de que se haya aprobado por votación registrada es señal de que esta cuestión merece un estudio más a fondo. La Comisión debe obrar con prudencia para no fusionar el tema en su conjunto con el alcance y la aplicación del principio de la jurisdicción universal.

137. En cuanto a otras decisiones y conclusiones de la Comisión, su delegación acoge con beneplácito la inclusión del tema de los principios generales del derecho internacional, porque la identificación de esos principios y los métodos de su identificación impartirán orientación a los Estados. Por otra parte, Malawi duda de que el tema de la prueba ante las cortes y tribunales internacionales merezca ser examinado por la Comisión. Cada tribunal tiene sus propias reglas en materia de prueba, y sería difícil armonizarlas. La Comisión debería elegir temas que ayuden a resolver problemas contemporáneos en el derecho internacional y concentrar sus recursos en dichos temas, especialmente en vista de que su volumen de trabajo sigue en aumento.

138. **El Sr. Nolte** (Presidente de la Comisión de Derecho Internacional) dice que el debate en la Sexta Comisión ha sido particularmente fructífero. Los

distintos Relatores Especiales han tomado nota sistemáticamente de las diversas observaciones que se han hecho, y la secretaría tiene intención de que el resumen del debate de cada uno de los temas sea sumamente detallado. Las opiniones expresadas por las delegaciones no solo ayudarán a la Comisión a refinar ciertos aspectos concretos, sino que han de servir también para adoptar nuevos enfoques con respecto a las cuestiones que han planteado interrogantes o dificultades generales.

139. En el próximo período de sesiones, la Comisión de Derecho Internacional (CDI) ha de conmemorar su septuagésimo aniversario. Esa sería, pues, una excelente oportunidad para examinar los aspectos positivos de la interacción entre la Sexta Comisión y la CDI y la forma de mejorarla. En contraste con la situación que existía hace diez años, cuando el orador se incorporó a la CDI por primera vez, el problema no radica ahora en la exigüidad de los temas que la Comisión pueda examinar, sino en que tal vez haya una plétora de temas. Es preciso estudiar las formas de lograr un equilibrio adecuado. En nombre de la Comisión de Derecho Internacional, el orador expresa su agradecimiento por el debate celebrado en el seno de la Sexta Comisión, que será debidamente reflejado en la labor de la CDI en el futuro.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.